

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

ACTOR: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

En la Ciudad de México, a tres de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta al **Ministro Alberto Pérez Dayán, instructor en el presente asunto**, con lo siguiente:

Constancia	Registro
Expediente de la controversia constitucional al rubro indicada, promovida por María de la Luz Hernández Martínez, quien se ostenta como Presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato.	2125

Demanda de controversia constitucional y sus anexos, recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, y turnada conforme al auto de radicación correspondiente. Conste.

Ciudad de México, a tres de marzo de dos mil veintitrés.

Fórmese el expediente físico y electrónico de la presente controversia constitucional promovida por quien se ostenta como Presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato.

Al respecto, de conformidad con los artículos 10, fracción I¹, y 11, párrafos primero y segundo², de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 305³ del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del diverso 1⁴ de esa Ley, se tiene por presentada a la

¹ **Artículo 10.** Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia; (...).

² **Artículo 11.** El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurren a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. (...).

³ **Artículo 305.** Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial.

⁴ **Artículo 1.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

promoviente con la personalidad que anuncia⁵, designando delegados y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad.

Ahora bien, de la revisión integral de la demanda y sus anexos se llega a la conclusión de que **ha lugar a desechar la controversia constitucional** con fundamento en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria⁶, el cual prevé que el Ministro instructor está facultado para desechar de plano un medio de control de constitucionalidad, si advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que tiene apoyo en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por “manifiesto” debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo “indudable” resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.”⁷

En ese sentido, resulta pertinente precisar que la improcedencia de una controversia constitucional no sólo depende de los supuestos que de manera específica prevé el artículo 19 de la Ley Reglamentaria, sino también los que puedan derivar del conjunto de normas que la integran y de las bases

⁵ De conformidad con la documental que al efecto exhibe y en términos del artículo 59, fracciones XV y XVI, de la **Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guanajuato**, que establecen lo siguiente:

Artículo 59. Son atribuciones de la Presidencia:

...

XV. Tener la representación del Congreso del Estado ante los poderes federales y estatales, los municipios y las organizaciones, instituciones y ciudadanía en general;

XVI. Fungir como representante legal del Congreso del Estado, con facultades generales y especiales, pudiendo delegar estas facultades; comunicando al Pleno el uso de las mismas;

...

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las siguientes: (...).

XXV. Representar al Congreso ante toda clase de autoridades administrativas y jurisdiccionales ante la o el Jefe de Gobierno, los partidos políticos registrados y las organizaciones de ciudadanos de la Ciudad; asimismo, podrá otorgar y revocar poderes para pleitos y cobranzas a las y los servidores públicos de las unidades administrativas que por las características de sus funciones estén acordes con la naturaleza de dicho poder; (...).

XXIX. Tener la representación legal del Congreso y delegarla en la persona o personas que resulten necesarias; (...).

⁶ **Artículo 25.** El ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.

⁷ Tesis **P./J. 128/2001**, Jurisprudencia, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, página ochocientos tres, con número de registro 188643.

constitucionales que la rigen, para lo cual aplica la tesis de rubro siguiente: **“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE RESULTAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA LEY Y, EN TODO CASO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”**⁸

En el caso se actualiza la causa de improcedencia fijada en el artículo 19, fracción IX⁹, de la Ley Reglamentaria, en relación con el diverso 105, fracción I, de la Constitución Federal, en virtud de que el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato carece de legitimación procesal para promover controversia constitucional contra la Federación, pues ello corresponde al titular del Poder Ejecutivo de esa Entidad.

Sobre el particular se tiene presente que la Presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, promueve controversia constitucional contra las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, lo que expresa en los siguientes términos:

“IV. Acto cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó.

La aprobación, expedición, promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de diciembre de dos mil veintidós, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; concretamente por lo que se refiere al último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, en relación con el penúltimo párrafo de este numeral.”

Asimismo, en el capítulo de interés legítimo y procedencia de la demanda cita como fundamento el artículo 105, fracción I, inciso a), de la

⁸ Tesis P./J. 32/2008, Jurisprudencia, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII correspondiente al mes de junio de dos mil ocho, página novecientos cincuenta y cinco, con número de registro 169528.

⁹ Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...).

IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley. (...).

Constitución Federal; así como argumenta que la controversia es procedente porque ha quedado acreditada su legitimación y porque existe una afectación a su esfera competencial que viola el orden constitucional, de ahí que puede acudir ante la Suprema Corte en defensa de las facultades que la Constitución Federal le otorga y que estima son invadidas por la Federación; de igual forma apunta que acude en representación del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, ya que la fracción I, del artículo 105 constitucional faculta a los poderes de las entidades federativas para la promoción de este medio de control constitucional; y que la violación cometida en su esfera de atribuciones consiste en que el Decreto reclamado, concretamente su artículo 26, limita el gasto en comunicación social, no obstante que ya se encuentra autorizado en un monto distinto en el presupuesto de egresos aprobado precisamente, por ese Congreso, es decir, alega, que la controversia es procedente porque la Federación excedió sus facultades y, por tanto, invadió su esfera competencial, pues la disposición afecta el presupuesto de egresos de la entidad. Estos planteamientos los apoya en distintas tesis relativas al interés legítimo en controversia constitucional; el objetivo de ese medio de control constitucional y otra sobre la representación del Presidente de la Diputación Permanente del Congreso de San Luis Potosí para suscribir promociones en representación de éste.

En síntesis, subraya que la controversia constitucional es procedente porque tiene como objetivo proteger el ámbito de atribuciones que la propia Constitución Federal contiene para los órganos originarios del Estado; y porque la Suprema Corte ha determinado que a través de ésta se pueden plantear todo tipo de violaciones a la Constitución General, en función de fortalecer el federalismo y garantizar su supremacía.

Ahora bien, el artículo 105, fracción I de la Constitución Federal prevé que la controversia constitucional procede contra normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, que se susciten entre las entidades, poderes u órganos de gobierno que enumera. Esa disposición se reproduce a continuación:

“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

- a). *La Federación y una entidad federativa;*
- b). *La Federación y un municipio;*
- c). *El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente;*
- d). *Una entidad federativa y otra;*
- e). *(DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)*
- f). *(DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)*
- g). *Dos municipios de diversos Estados;*
- h). *Dos Poderes de una misma entidad federativa;*
- i). *Un Estado y uno de sus Municipios;*
- j). *Una Entidad Federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México;*
- k). *Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y*
- l). *Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión. (...)."*

Precisado lo anterior, debe decirse que, en el caso, no se actualiza el supuesto normativo que menciona la promovente en su demanda, es decir, lo dispuesto en el inciso a), de la fracción I, del artículo 105 de la Constitución Federal, porque si bien establece que este Alto Tribunal conocerá de las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones (con excepción de aquellos de la materia electoral) se susciten entre la Federación y una "**entidad federativa**", también lo es que quien puede promover en defensa de un Estado de la República, es el Gobernador de éste; y, por otro lado, aun afirmando que la promovente representa un poder de una entidad federativa, ese supuesto tampoco está incluido en el artículo 105, es decir, una controversia constitucional ejercida por un Poder Legislativo Local contra el Congreso de la Unión y el Presidente de la República.

En efecto, es verdad que la controversia constitucional es un medio de control que tiene por objeto la defensa de las facultades que la Constitución Federal otorga a los distintos órganos de gobierno que enumera ese precepto 105; y, en específico, el inciso a) prevé la procedencia de la controversia entre la Federación y una "**entidad federativa**", supuesto en el cual, quien puede promover en representación de esta última, es el Gobernador del Estado, Poder de la Entidad que detenta esa representación, lo que se desprende del artículo 77, fracción XVIII¹⁰, de la Constitución Política del Estado Libre y

¹⁰ **ARTICULO 77.**- Las facultades y obligaciones del Gobernador del Estado, son: (...). XVIII. Representar al Estado y delegar esta representación en los términos que establezca la Ley; (...).

Soberano de Guanajuato, el cual prevé como facultades y obligaciones del Gobernador, entre otras, la de representar al Estado y delegar esta representación en los términos que establezca la ley.

Desde luego, el Congreso del Estado de Guanajuato es un Poder de esa entidad en términos del artículo 36 de la propia Constitución y puede promover controversias con apoyo en los incisos h) y k) de la fracción I, del artículo 105 constitucional; empero, el diverso 63 de la Constitución Local que enumera sus facultades, no contiene hipótesis alguna que le confiera la representación del Estado; es por ello que la promovente de la controversia constitucional no tiene la legitimación procesal necesaria para intentar el ejercicio de este medio de control constitucional.

Esta determinación no significa que el Estado de Guanajuato no pueda promover controversia constitucional contra de normas, actos u omisiones atribuibles a la Federación, pero el ejercicio de la acción corresponde a quien tiene la representación de la Entidad, esto es, el Titular del Poder Ejecutivo Local.

Además, tampoco son obstáculo para el desechamiento de la demanda, los argumentos expresados por la promovente en el capítulo relativo al "**interés legítimo y la procedencia**", en virtud de que sus alegatos se encuentran encaminados al objetivo de la controversia constitucional, es decir, se refieren a la defensa de las facultades que la Constitución Federal otorga a los Estados frente a la Federación, y cómo es que el ámbito competencial que defiende, se encuentra vulnerado en su opinión, por la Federación, exposición que indudablemente se vincula con el fondo de la controversia, pero que no corresponde al presupuesto procesal que debe acreditarse en primer término, que es el de la representación de la Entidad Federativa, extremo que, como se apuntó, lo detenta el Poder Ejecutivo de Guanajuato.

Así las cosas, resulta evidente que, en la especie, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato no tiene legitimación procesal para promover la controversia constitucional en representación de dicha Entidad y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria, en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.

Por lo expuesto, la presente demanda debe desecharse de plano, con sustento en la tesis que a continuación se reproduce:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO. Si de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia de la controversia constitucional y que, por sus propios caracteres, no son desvirtuables con su tramitación pues nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar esas consecuencias, aquélla debe considerarse notoriamente improcedente y, por ende, procede desecharla de plano.”¹¹

Por las razones expuestas, se

ACUERDA

PRIMERO. Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda de controversia constitucional promovida por María de la Luz Hernández Martínez, quien se ostenta como Presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato.

SEGUNDO. Sin perjuicio de lo anterior, se tiene a la promovente designando delegados y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad.

TERCERO. Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido.

Dada la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, con apoyo en el artículo 282¹² del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo la notificación del presente acuerdo.

Finalmente, añádase al expediente para que surta efectos legales la impresión de la evidencia criptográfica de este proveído, de conformidad con el artículo 9¹³ del Acuerdo General **8/2020**, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¹¹ Tesis **P. LXXI/2004**. Aislada, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX correspondiente al mes de diciembre de dos mil cuatro, página mil ciento veintidós, con número de registro 179954.

¹² **Artículo 282.** El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.

¹³ **Artículo 9.** Los acuerdos y las diversas resoluciones se podrán generar electrónicamente con FIREL del Ministro Presidente o del Ministro instructor, según corresponda, así como del secretario respectivo; sin menoscabo de que puedan firmarse de manera autógrafa y, una vez digitalizados, se integren al expediente respectivo con el uso de la FIREL.

Notifíquese. Por lista y por oficio al Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad.

Cúmplase.

Lo proveyó y firma el **Ministro Instructor Alberto Pérez Dayán**, quien actúa con el **Licenciado Eduardo Aranda Martínez**, Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.

